



# Haciendo frente a la fragilidad: mujeres y paz en el Urabá y el Catatumbo



## CON EL APOYO DE:



# Directora Ejecutiva de la FIP

María Victoria Horente

# Director Área de Dinámicas del Conflicto

Juan Carlos Garzón

### **Autoras**

Irina Cuesta — Investigadora
Laura Cuéllar – Investigadora
Lorena Zárate – Asistente de investigación
Carolina Dueñas – Asistente de investigación
Fanny Escobar – Gestora local, Urabá
Sandiego Zambrano – Gestora local, Urabá
Diana Amaya — Gestora local, Catatumbo
Martha Cáceres\* – Gestora local, Catatumbo

### Transforma

Tatiana Mosquera Aura María Durán

# Edición y corrección de estilo

Martín Franco Vélez

# Fotografías

La Incubadora, FIP

# Diseño y diagramación

Ladoamable ltda www.ladoamable.com

# ISBN

978-958-5517-66-0

# Fundación Ideas para la Paz (FIP)

Calle 100 No. 8A – 37 Torre A. Of. 701. Bogotá Tel. (57–1) 218 3449 www.ideaspaz.org / e-mail: fip@ideaspaz.org

0

# **Contenido**

- 4 INTRODUCCIÓN
- 6 ¿QUÉ SON LOS CONTEXTOS FRÁGILES?
- 9 LA PAZ EN CONTEXTOS DE FRAGILIDAD:
  PERSPECTIVAS DE LAS MUJERES EN URABÁ Y CATATUMBO
- DEL CATATUMBO AL URABÁ, DEL URABÁ AL CATATUMBO: ¿CÓMO POTENCIAR AGENDAS TERRITORIALES DE PAZ, EQUIDAD DE GÉNERO Y SEGURIDAD EN MEDIO DE LA FRAGILIDAD?
- SEIS MENSAJES DE LA INCUBADORA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y EL ROL DE LAS MUJERES EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA FRAGILIDAD TERRITORIAL
- FOTOGALERÍA DE LA INCUBADORA

# Introducción

Situaciones de crisis como la que ha generado la pandemia, evidencian y agudizan las brechas de género y otras expresiones de fragilidad en los territorios, y ponen a prueba las capacidades de respuesta del Estado y de las comunidades de cara a escenarios cambiantes. En las regiones, las capacidades locales y la resiliencia de las comunidades han sido fundamentales para responder a esta crisis y continuar con el trabajo en torno a la construcción de paz.

En particular, las mujeres, las lideresas y las organizaciones a las que representan, han desarrollado estrategias para hacerle frente a las condiciones de

fragilidad de sus territorios, a través del fortalecimiento de tejidos comunitarios, del impulso de la acción colectiva o del liderazgo de procesos de incidencia y diálogo con diversos actores. Las experiencias de resiliencia frente a la fragilidad territorial combinan las vivencias individuales y colectivas, con aprendizajes aún en deuda de ser visibilizados y capitalizados para la paz territorial. En Urabá, se han acumulado experiencias de

resiliencia y organización social: desde la década del 90, los liderazgos de mujeres han tenido un rol protagónico en la organización a favor de la defensa de sus derechos y los procesos de verdad, justicia y reparación. En Catatumbo, las mujeres líderes en medio de la reconfiguración del conflicto han acumulado experiencias en Juntas de Acción Comunal, procesos de base y gestión de las necesidades inmediatas de sus comunidades.

En 2020 los retos para el trabajo en territorio y la continuidad de procesos comunitarios, de investigación y de fortalecimiento en torno a las agendas de paz y seguridad, resultaron diversos. Incluso en este contexto, las organizaciones comunitarias han buscado alternativas para sostener sus procesos y seguir desafiando la fragilidad a través de video llamadas, grupos de WhatsApp y otros canales.

Durante este año, la Fundación Ideas para la Paz (FIP), con apoyo del International Development Research Centre de Canadá (IDRC), desarrollaron la estrategia La Incubadora, un espacio de encuentro e intercambio de saberes para la generación colectiva de conocimiento y la transformación de las condiciones de fragilidad. Esta iniciativa se ha desarrollado territorialmente con el apoyo de la Asociación Muje-

res del Plantón del Urabá y la Red de Mujeres Emprendedoras del Catatumbo (impulsada por la RedConcerto). A través de encuentros virtuales, entrevistas a actores claves y diálogos locales, se han analizado los factores que facilitan la persistencia de la fragilidad en Urabá y Catatumbo, y lo que esto significa para la garantía de derechos de las comunidades. También se han identificado los retos y oportunidades territoriales para alcanzar la

paz en estos contextos frágiles, en los que persisten la resiliencia y la acción colectiva<sup>1</sup>.

1 En La Incubadora se han realizado 82 entrevistas, 26 reuniones, tres talleres virtuales de fortalecimiento de organizaciones locales y dos espacios virtuales de diálogos territoriales. En estas actividades han participado 170 personas provenientes de entidades públicas, cooperación internacional, sector empresarial, instituciones académicas y sociedad civil. De manera complementaria, se ha realizado el seguimiento a 28 variables en bases de datos y revisión bibliográfica. Esta estrategia hace parte del proyecto Alcanzar la paz en medio de la fragilidad: ¿cómo interactúan la violencia, la seguridad y el desarrollo socioeconómico en Colombia?, financiado por el IDRC de Canadá. Este proyecto tiene como objetivo identificar y analizar los impactos diferenciados del Acuerdo de Paz para abordar la violencia basada en género, la inseguridad y la falta de oportunidades económicas en las regiones mencionadas, así como examinar el impacto que tienen las condiciones de fragilidad de estos territo-

rios en la implementación del Acuerdo.

Incubadora, una iniciativa de la FIP y IDRC, realizó encuentros virtuales, entrevistas a actores claves y diálogos locales para analizar los factores que facilitan la persistencia de la fragilidad en Urabá y Catatumbo

Durante un año, La

Este informe recoge las reflexiones realizadas durante 2020 en La Incubadora y las vivencias de mujeres líderes del Urabá y el Catatumbo. Estas reflexiones, que buscan ser fieles a las perspectivas y análisis de las lideresas sobre sus regiones, y que se complementan con el análisis de investigadoras de la FIP, buscan ser un punto de partida para vincular a distintos actores territoriales en la discusión

e identificar oportunidades y acciones locales que contribuyan a transformar la fragilidad y potenciar la resiliencia comunitaria en manos de las mujeres<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> El texto presenta las historias y testimonios de mujeres líderes de estas dos regiones. Se cambiaron los nombres reales y, en algunos casos, las historias han sido construidas recogiendo diferentes percepciones y relatos. Esto con el fin de

preservar la seguridad y privacidad de ellas y sus experiencias personales.

# ¿Qué es La Incubadora? Voces de sus protagonistas

"Ha sido un ejercicio que nos ha permitido acercarnos a las problemáticas de dos regiones. La Incubadora ha sido como un canasto en la que cada una de las participantes ha venido metiendo sus conocimientos, sus maneras de investigar, lo que le ha funcionado y lo que no"

Investigadora nacional

"La Incubadora es un intercambio de ideas entre las mujeres de Catatumbo y Urabá. Ha sido un ejemplo para mí, no conocía de este tema ni cómo era una incubadora y me ha fortalecido"

Mujer líder Catatumbo

"Es un trabajo en red que ha potenciado a personas y organizaciones que estamos generando ideas sobre cómo investigar y crear nuevas formas de trabajo entre investigadoras y lideresas"

Investigadora nacional

"La Incubadora ha sido un trabajo arduo y gratificante: arduo por todo lo que hicimos en los municipios con entrevistas y trabajo de campo; gratificante, por lo que venimos aprendiendo con las compañeras de Bogotá y de Catatumbo. Nos tocó en lo virtual hacer algo nuevo, tratando de seguir adelante con estos temas"

Mujer líder Urabá antioqueño



# 1. ¿Qué son los contextos frágiles?

"¿Qué es algo frágil? Algo quebradizo, inconsistente.
Algo que se puede romper, pero no se ha roto, algo de
tratar con cuidado. Lo frágil se puede reparar"

Mujer líder, Catatumbo

En un territorio frágil, confluyen riesgos asociados a la baja capacidad estatal, la precaria situación socioeconómica de la población, los altos índices de violencia social y el desarrollo de dinámicas ilegales, que tienen un impacto directo en las dimensiones económicas, políticas, sociales, ambientales y de seguridad como la corrupción, desigualdad, narcotráfico y migración.

Según el Índice de Estados Frágiles (FSI), del Fund for Peace, en 2020 Colombia se ubicó en el puesto 65 en la categoría de países en peligro creciente junto a los países de Latinoamérica como Brasil, Bolivia y Guatemala<sup>3</sup>. Recientemente, organizaciones multilaterales han reconocido la importancia de priorizar la prevención y mitigación de conflictos y expresiones de fragilidad en estos contextos como estrategia para avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de modo que esta perspectiva toma cada vez más relevancia<sup>4</sup>.

La perspectiva de la fragilidad permite identificar no solo factores de riesgo, sino también expresiones de resiliencia (entendida como los recursos y capacidades locales para afrontar, mitigar y gestionar estos riesgos). La fragilidad responde a variables de orden social, comunitario e incluso cultural, por lo que su mitigación implica el trabajo colectivo en escenarios como el familiar, comunitario e institucional. En este sentido, potenciar y fortalecer las distintas experiencias y expresiones de resiliencia es una oportunidad para transformar condiciones de fragilidad territorial. Cada elemento que define un contexto de fragilidad puede ser visto desde el enfoque de género; en los estudios sobre la fragilidad, el análisis de la inequidad de género permite observar el nivel de garantía de derechos e inclusión. La inequidad de género, las normas sociales alrededor del ser hombre y ser mujer, así como las violencias basadas en género, pueden ser causa o síntoma de la fragilidad<sup>5</sup>.

 Las normas sociales que reproducen inequidades de género hacen lo propio con las condiciones de fragilidad, violencia y conflicto en un territorio, y agudizan sus impactos en poblaciones específicas. Esas normas juegan un rol en la continuidad de la fragilidad pues son la base de relaciones desiguales e inequitativas, no sólo entre hombres y mujeres, sino entre las comunidades y el Estado.

Recientemente,
organizaciones
multilaterales han
reconocido la importancia
de priorizar la prevención
y mitigación de
conflictos y expresiones
de fragilidad como
estrategia para avanzar
hacia los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
(ODS)

- Fund for Peace (2020). Fragile States Index Annual Report. Obtenido de: https://fundforpeace.org/wp-content/uploads/2020/05/fsi2020-report.pdf
- 4 Banco Mundial. (2020). Strategy for Fragility, Conflict and Violence 2020–2025. Obtenido de: http://documents1.worldbank.org/curated/en/844591582815510521/pdf/World–Bank–Group–Strategy–for–Fragility–Conflict–and–Violence–2020–2025.pdf
- Sweetman, C.; Rowlands, J. (2016). Introduction: Working on gender equality in fragile contexts. Gender & Development. No. 24 (3). Pp. 337–351. Obtenido de: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13552074.2016.12 48033

- La construcción de paz, la gobernanza local y la resolución de conflictos en estos contextos se ven afectados por estas relaciones desiguales e inequitativas.
- Adelantar acciones en contextos de fragilidad desde una perspectiva de género, no solo implica abordar las formas en que mujeres y niñas experimentan esos contextos de fragilidad, sino también la participación de las mujeres en procesos de gobernanza local y construcción de paz.
- Reconocer el papel de las mujeres en la etapa temprana del posconflicto, así como sus preocupaciones y reflexiones, contribuye a cerrar brechas de género en el mediano y largo plazo<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Gender Innovation Lab. (2020). Can public works enhance welfare in fragile economies? The London Program in the Central African Republic. Obtenido de: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33223/Can-Public-Works-Enhance-Welfare-in-Fragile-Economies-The-Londo-Program-in-the-Central-African-Republic.pdf?sequence=1



# 2. La paz en contextos de fragilidad: perspectivas de las mujeres en Urabá y Catatumbo

En Colombia, el Urabá antioqueño y el Catatumbo son focos de fragilidad que presentan, a su vez, escenarios diferenciados, no solo por las trayectorias que tuvo el conflicto armado en estas regiones, sino por la incidencia y dinámicas que han representado diversos procesos de paz, políticas de seguridad nacional, la influencia del sector empresarial y las iniciativas de desarrollo territorial. A esto se le suma los diferentes niveles de avance de la implementación del Acuerdo de Paz en cada región<sup>7</sup>.

En el Urabá antioqueño las acciones del conflicto disminuyeron su intensidad desde la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a principios de la década del 2000, pero la violencia se ha transformado en un contexto en el que predomina un actor armado ilegal, en particular las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). En materia de desarrollo, en la región han persistido brechas socioeconómicas que contrastan con las apuestas de desarrollo agroindustrial. En el Catatumbo, por su parte, las garantías de seguridad han representado uno de los principales retos, pues ha sido un escenario donde el conflicto se ha reconfigurado en medio de la implementación del Acuerdo de Paz.

En las dos regiones, la implementación del Acuerdo ha confluido, además, con dinámicas migratorias relacionadas con los pasos fronterizos del tapón del Darién en la frontera con Panamá, en el caso de Urabá, y la frontera con Venezuela, en el de Catatumbo.

# 2.1. Urabá antioqueño

"Venimos desde los 90 muchas organizaciones. Es como un ciclo que se viene dando con las mismas mujeres... Unas se han sostenido, otras no. Esto existía antes de la desmovilización de las AUC. También se conecta con Ley 1448<sup>8</sup> y ahora con el Acuerdo de Paz"

Mujer líder, Urabá antioqueño

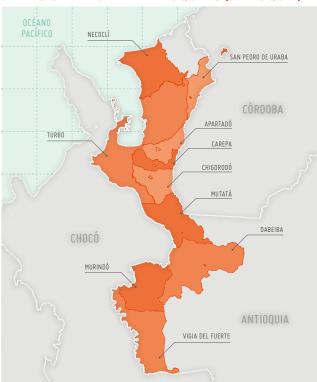
En el Urabá antioqueño la fragilidad territorial se ha expresado en, al menos, tres dinámicas generales:

- Ha sido escenario de diferentes momentos de orden y regulación por parte de actores armados a lo largo del conflicto, alrededor del control de las economías ilegales, un elemento que persiste en la actualidad. En la región se han normalizado patrones de violencia y modalidades de control que han conducido a la tolerancia social frente a la violencia y la explotación sexual de mujeres y niñas.
- Hay un contraste entre el desarrollo económico e industrial de los municipios del Eje Bananero<sup>9</sup> y las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones ubicadas en zona rural, lo que se ha expresado en necesidades básicas insatisfechas y limitaciones de acceso a servicios de justicia. Las mujeres han enfrentado brechas socioeconómicas que se evidencian en la falta de acceso a recursos y empleabilidad laboral, así como dependencia económica. Brechas que se profundizan en zonas rurales y en mujeres afrodescendientes e indígenas.
- 7 Este informe incluye en su análisis a los municipios de la subregión PDET de Urabá antioqueño (Chigorodó, Carepa, Apartadó, Dabeiba, Mutatá, San Pedro de Urabá, Necoclí y Turbo), así como a Murindó y Vigía del Fuerte, que, si bien son parte del Urabá antioqueño, quedaron incluidos en la subregión PDET de Chocó. Así mismo, a los municipios de la subregión PDET de Catatumbo, compuesta por Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.
- 8 La Ley 1448 de 2011 es la ley por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Ministerio del Interior y de Justicia. (2011). Ley de Víctimas y Restitución. Obtenido de: https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/LEY\_2011\_1448.pdf
- 9 El Eje Bananero está integrado por los municipios de Apartadó, Turbo, Chigorodó y Carepa.

 No obstante, en este contexto se han acumulado experiencias de resiliencia y organización social frente a las fragilidades territoriales. Desde la década del 90, los liderazgos de mujeres han tenido un rol protagónico en la organización a favor de la defensa de sus derechos y los procesos de verdad, justicia y reparación.

MAPA 1

### REGIÓN DEL URABÁ ANTIQUEÑO (ANTIQUIA)



El Acuerdo de Paz se ha encontrado en la región con legados y transformaciones generadas tras la desmovilización de las AUC. Si bien hubo cambios positivos, persisten problemáticas como la violencia urbana y el control armado en las zonas rurales. Esto ha contribuido a una percepción de que las violencias persisten en el territorio, pero que se han ido transformando.

2.1.1. "Aunque vivimos varios procesos de paz, sigue un conflicto oculto, un algo que sentimos, un peso. Grupo tras grupo ya no sabemos ni quién es quién. Es un círculo que no se termina". Mujer líder, Urabá antioqueño

Esta región se ha caracterizado por el predominio de organizaciones armadas ilegales que han efectuado prácticas de control y regulación social, afectando particularmente a jóvenes, mujeres y niñas, con la vinculación a redes de microtráfico, el control armado en zona rural y explotación sexual a través de redes a su servicio. La reconfiguración de estructuras de crimen organizado luego de la desmovilización de las AUC, y la eventual consolidación y predominio de las AGC, implicó la transición de un modelo de dominio paramilitar a un escenario de control de las AGC que perdura hasta la fecha.

El control actual de las AGC tiene diferencias territoriales, que incluyen la prevalencia del Eje Bananero y los municipios del norte de la región como núcleos de dominio, y un control más atenuado en municipios del sur de la región (como Murindó, Vigía del Fuerte y Dabeiba), donde la influencia del ELN ha empezado a ganar relevancia<sup>10</sup>. La base de acciones del conflicto armado de la FIP reporta que, entre 2016 y 2019, las AGC han realizado el 72% de las acciones armadas, las cuales se concentran en el Eje Bananero (emboscadas, hostigamientos y propagandas alusivas al grupo armado). Entre 2016 y 2019, el 67% de las acciones de los grupos armados se han concentrado en Turbo (29%), Dabeiba (17%), Apartadó (12%) y Carepa (9%).

Respecto a la situación humanitaria, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), no reporta un alto impacto en la región durante el proceso de diálogo entre el gobierno y las FARC, ni en la posterior implementación

<sup>10</sup> Defensoría del Pueblo. (2018). Alerta Temprana 064.Defensoría del Pueblo. (2019). Alerta Temprana 009.

<sup>11</sup> Bases de datos de la FIP, OCHA y Ministerio de Defensa.

del Acuerdo. Sin embargo, se han generado alertas sobre otras violencias que han aumentado, como las amenazas y homicidios. Tras la firma del Acuerdo de Paz, entre 2016 y 2019, las amenazas representaron el 51% de las acciones de impacto humanitario según OCHA y los homicidios han incrementado en el mismo periodo con relación a 2010- 2012 (antes de la negociación entre el Gobierno y las FARC), y 2012-2016 (durante la negociación)<sup>11</sup>.

Enilda es una mujer líder del municipio de Turbo. Tiene 54 años y hace parte de una organización que lucha por la defensa de los derechos de las mujeres. Hace cuatro años montó un restaurante de almuerzos en el que trabaja con su hija Martha y su sobrina Luisa.

"Para mí siempre fue importante que las mujeres podamos defendernos económicamente. Nosotras atendemos el restaurante y trabajamos con las compañeras en sensibilización y previniendo la violencia contra la mujer".

Desde su perspectiva, los procesos de paz recientes han generado cambios en las condiciones de seguridad de la región:

"Después de la desmovilización de las AUC hubo calma, pero al rato volvió a ponerse feo. Se sigue viendo lo mismo: se desarma un grupo y luego vuelve otro a controlar (...) Ahora están por ahí otros; nadie los nombra, pero todos saben que existen. Volvimos a la ley de antes: ver, oír y callar. (...) En cuanto a las FARC, a pesar de que estaban, eran más discretas. Por eso se sintió más cambio cuando se desmovilizaron las AUC que con el proceso con las FARC. (...) Lo que está pasando ahora es que así ya no se escuche que haya combates, se está metiendo el ELN. Se ven más desplazamientos hacia los lados del Chocó, por ejemplo. En los territorios que estaban ocupados por las FARC ya se está viendo esa incertidumbre".

Desde la perspectiva de algunos actores territoriales participantes de La Incubadora, en el Urabá antioqueño no se percibieron transformaciones generalizadas en seguridad a partir de la firma del Acuerdo de Paz. Esto se debe, en parte, a que en el momento de la negociación las FARC no ejercían una influencia significativa en varias zonas de la región.

Aunque los frentes del Bloque Iván Ríos operaron en el Urabá antioqueño antes de la firma del Acuerdo de Paz —en la zona rural del Eje Bananero, Mutatá, Dabeiba, Vigía del Fuerte y Murindó—, su incidencia territorial estaba debilitada y existían acuerdos comerciales con las AGC asociados al narcotráfico<sup>12</sup>. No obstante, como lo han venido advirtiendo las comunidades y la Defensoría del Pueblo a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT) desde 2018<sup>13</sup>, en Vigía del Fuerte, Murindó y Dabeiba se han presentado tensiones entre las AGC y el ELN asociadas a la disputa por los territorios controlados antes por las FARC en Chocó, cuyas implicaciones humanitarias han incrementado las percepciones de inseguridad de las poblaciones.

# 2.1.2. "Se necesita desarrollo, pero para los municipios, para las personas de a pie".

Mujer líder, Urabá antioqueño

Las dinámicas del conflicto se han concentrado en los municipios del Eje Bananero, los cuales presentan los mayores índices de desarrollo económico en Urabá. Esto ha representado un desafío, pero también un punto de tensión entre comunidades, Estado y empresas. El Eje Bananero aporta el 80,6% del PIB de la región<sup>14</sup>, posicionándose como el núcleo del desarrollo económico del Urabá. Desde la expansión del sector agroindustrial en la década del 70, los municipios del Eje Bananero fueron fuertemente golpeados

<sup>12</sup> InSight Crime (2013). Bloque Iván Ríos: la división de combate más vulnerable de las FARC. Obtenido de: https://es.insightcrime.org/investigaciones/bloque-ivan-rios-division-combate-vulnrable-farc/

<sup>13</sup> Defensoría del Pueblo. (2018). Alerta Temprana 064. Defensoría del Pueblo (2019). Alerta Temprana 009. Defensoría del Pueblo. (2020). Alerta temprana 014

<sup>14</sup> Fundación Corona; Fundación ANDI; USAID; ACDI/VOCA. (2019). Informe Nacional de Empleo Inclusivo (INEI). 2018–2019. Pp. 243. Obtenido de: http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/sites/default/files/files\_articles/inei\_-\_empleo\_inclusivo\_2018\_-.pdf

por dinámicas de despojo y abandono de tierras. En décadas recientes, tanto en el periodo previo a la negociación con las FARC (2008-2012), como durante los diálogos y la fase de implementación, las acciones armadas y el impacto humanitario se han concentrado en el Eje Bananero. Es también en sus municipios donde tienen mayor incidencia las redes de explotación sexual y la vinculación de jóvenes a las redes de microtráfico controladas por las AGC.

A pesar de que los municipios del Eje Bananero corresponden a aquellos que, comparativamente, han presentado menores índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en la región entre 2005 y 2018, la población ha afrontado afectaciones significativas en términos de violencia y seguridad. La consolidación del Eje Bananero como escenario del conflicto armado no puede desligarse, por un lado, de su posición geoestratégica y sus condiciones de infraestructura que facilitan el flujo de economías ilegales; y, por otro, de la relación entre el auge del desarrollo agroindustrial y las dinámicas del conflicto.

Si bien el Acuerdo de Paz ha sido reconocido por el sector empresarial y por los líderes comunitarios como un impulso al desarrollo territorial, aún persisten brechas socioeconómicas y vulnerabilidades en un modelo regional de desarrollo que se percibe como centrado en lo económico y en menor medida en lo social. La subregión de Urabá es la tercera economía de mayor peso en Antioquia —después del Valle de Aburrá y el oriente antioqueño— en cuanto a su contribución al PIB departamental<sup>15</sup>. A su vez, el Eje Bananero es el dinamizador de la economía subregional, concentrando la oferta educativa<sup>16</sup> y los megaproyectos de infraestructura como Puerto Antioquia, que lo han posicionado como un bastión estratégico para el desarrollo departamental.

No obstante, el desarrollo económico se ha concentrado en los cascos urbanos de los municipios del Eje Bananero, dejando rezagos significativos en las zonas rurales y en el resto de los municipios de la región. Por

ejemplo, entre 2005 y 2018, Apartadó presentó una disminución en el porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas, pues pasó del 24,5% al 14%. En contraste, Vigía del Fuerte mostró en el mismo periodo un incremento, pasando de 68,3% a un 77,8% de su población en estas condiciones<sup>17</sup>. Las zonas rurales de los municipios del Eje Bananero tienen una proporción de población con necesidades insatisfechas similares a los de municipios como Necoclí y Mutatá, que presentan un menor desarrollo agroindustrial<sup>18</sup>.

El covid-19 ha generado una presión adicional sobre las vulnerabilidades socioeconómicas preexistentes, al igual que en las otras regiones del país. No obstante, el rol del sector empresarial para mitigar los efectos de la pandemia se destaca como uno de los distintivos de la región. A través de plataformas como el Comité Universidad, Empresa, Estado, Sociedad (CUEES), se han impulsado acciones para la reactivación económica en articulación con alcaldías municipales, la dotación del primer laboratorio de biología molecular de la región para la detección temprana del covid-19 y el fortalecimiento de acciones de responsabilidad social corporativa, entre otros<sup>19</sup>.

- 15 Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. (2019). Perfiles socioeconómicos de las subregiones de Antioquia. Esta cifra corresponde a información del 2015 derivada del Anuario Estadístico de Antioquia, 2016.
- 16 Las 33 entidades de formación para el trabajo de la región se encuentran ubicadas en Turbo y Apartadó. Así mismo, en el 2017 el 67,8% de estudiantes estudiaban en los municipios de Turbo (26,8%), Apartadó (22,5%) y Chigorodó (10,9%). Fundación Corona; Fundación ANDI; USAID; ACDI/VOCA. (2019). Informe Nacional de Empleo Inclusivo (INEI) 2018–2019. Pp. 222. Obtenido de: http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/sites/default/files/files\_articles/inei\_-\_empleo\_inclusivo\_2018\_-.pdf
- 17 El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del DANE, busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas: viviendas inadecuadas, viviendas con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia económica, viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela
- 18 DANE (2005). Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV). DANE (2018). Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV).
- 19 CUEES. (2020). Plenaria No. 36. Junio 4 de 2020. Obtenido de: https://www.facebook.com/watch/live/?extid=yIZuUNdwnL5NSjzA&v=1137867746586345&ref=watch\_permalink

Nubia y otras 19 mujeres de Vigía del Fuerte hacen parte de una asociación productiva conformada en 2017. En 2019 empezaron a ser parte de una red que integra a otras 18 asociaciones de mujeres de diferentes municipios del Urabá, desde la cual se trabaja para fortalecer las capacidades de las mujeres en la prevención de violencias de género y acceso a la justicia.

"Con esto se busca trabajar con las compañeras para tener un ingreso que permita salir adelante. Trabajamos el tema de la Ley 1257 y queremos continuar este trabajo, fortaleciendo a las mujeres de nuestra asociación".

Para Nubia, son particularmente preocupantes las brechas urbano-rurales y la falta de oportunidades:

"Se ve el desarrollo en la parte de las bananeras, en las empresas, pero hacia los trabajadores no se ve el progreso (...) Se sabe que las carreteras y los puertos van a traer desarrollo para los comerciantes, para quienes los traen, pero ¿y para la gente? Se ve esa desigualdad que hay (...) [En Urabá] el que no esté preparado, este 'desarrollo' se lo come. Todo el mundo viene a tener buenos cargos desde afuera, pero no son cargos para la gente de Urabá (...) Traemos a gente de afuera y los jóvenes de Urabá se van entonces para el narcotráfico. (...) La población rural dispersa que es la que menos posibilidad tiene de acceder a servicios, programas y derechos, y esto dificulta a las mujeres convertirse en actores sujetas de derechos (...) Se debe mejorar la calidad de las vías, salud y educación".

2.1.3. "Aunque se haya hecho un trabajo muy fuerte y concientizado, falta mucho más para contrarrestar la violencia contra las mujeres. La mayoría no denuncian por miedo a que las maten, las echen o las hagan ir".

Mujer líder, Urabá antioqueño

La violencia sexual y explotación de niñas y jóvenes ha sido una preocupación mayor. En esta dinámica se ha destacado la presencia de redes de explotación que han estado al servicio de las AGC, así

como inmersas en economías ilegales concentradas, principalmente, en el Eje Bananero<sup>20</sup>. Estos contextos de explotación sexual se derivan en gran medida de condiciones de vulnerabilidad de poblaciones rurales, donde este grupo puede tener una mayor influencia.

Desde la época paramilitar de los años 90, se destaca el uso de la violencia sexual como forma de sanción y regulación social, así como su normalización como una dinámica propia de "lo masculino" y el ejercicio del poder. El abordaje de estas violencias representa un desafío particular en términos de comprensión de las dinámicas de ilegalidad y su relación con violencias basadas en género, y un reto para la protección de las mujeres y niñas<sup>21</sup>.

Si bien las violencias basadas en género guardan relación, en algunos casos, con dinámicas de explotación donde ejercen control las estructuras criminales, no se explican solamente en este contexto: hay diferentes violencias que tienen lugar también en ámbitos comunitarios y familiares. Según datos de la Policía Nacional, a nivel departamental, Urabá es la segunda subregión antioqueña —después del Valle de Aburrá— con mayor registro de delitos sexuales en el periodo 2010-2019 (13.016 casos para Valle de Aburrá y 2.132 para Urabá). Sin embargo, durante 2018 y 2019, este territorio ocupó el tercer puesto, superado de nuevo por Valle de Aburrá y por el oriente antioqueño. En Urabá, estos delitos se concentran en el rango de edad entre 10 y 15 años.

. . . . .

Revista Semana (2017). Clan del Golfo: el depredador sexual de Urabá. Obtenido de: https://www.semana.com/nacion/articulo/clan-del-golfo-el-de-predador-sexual-de-uraba/525264, El Tiempo (2018). 'Nada me ha marcado más como policía que la violencia sexual'. Obtenido de: https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/general-jorge-luis-vargas-detalla-el-abuso-sexual-a-ninos-por-parte-del-clan-del-golfo-220834

<sup>21</sup> Fundación Ideas para la Paz (2029). Territorio, seguridad y violencias basadas en género en Apartadó.

En la región, la violencia intrafamiliar tiene una mayor victimización sobre las mujeres, tal y como ocurre a nivel nacional. Estas violencias se registran con mayor concentración en los municipios del Eje Bananero, lo que obedece también a mayores posibilidades de acceso a canales de denuncia. En este sentido, las dinámicas de estas violencias, su registro y análisis territorial, siguen siendo un reto. Si bien la violencia sexual está relacionada a dinámicas familiares, en contextos particulares se asocia a dinámicas de control armado.

Durante 27 años, María, del municipio de Necoclí, sufrió violencia económica por parte de su pareja.

"[Después de] vivir muchas humillaciones empecé un trabajo interno de aplicar lo que aprendí con asociaciones de mujeres y de mirarme al espejo durante 44 días y decirme 'sos hermosa, sos especial, sos capaz de muchas cosas, valés mucho' (...) Aprendí a quererme tanto a mí misma (...) [Ahora] me encanta vestirme hermosa, de tacones, de vestidos largos y bien vistosos. Empecé a sonreír y ahora salgo sola; me tomo un tinto en el parque sola y lo disfruto mucho".

Desde la perspectiva de María, las barreras para acceder a canales de justicia y las dinámicas de explotación sexual son preocupaciones centrales cuando se habla de las violencias basadas en género en la región:

"No tenemos un aparato de justicia completo en la región de Urabá. No tenemos suficientes comisarías, policía de derechos humanos, la fiscalía es incompleta (...) La ley no le presta la seguridad a las mujeres para denunciar estos casos, la protección no es la ideal. La esposa denuncia y le dan un teléfono para que llame al policía que le asignaron. Cuando llama al policía, ya pasó lo que pasó (...) También se ve la explotación sexual a nuestras niñas. Lo económico es algo que lleva a las niñas a este flagelo porque a veces, por las ganas de tener una mejor vida, se ve normalizado que se vayan las muchachas con un hombre, que traiga el dinero a la casa, pero que tenga una moto, un buen celular, un blue jean. Todo esto hace que estas niñas caigan en esto de los grupos armados, que las usan como ellos quieren".

En el contexto del covid-19, mujeres líderes de la región han manifestado preocupación por la violencia intrafamiliar, por las dificultades en el acceso a las rutas de atención y por la prevalencia de la trata de niñas y mujeres de los actores armados hacia las inmediaciones del río Atrato. Frente a este escenario, organizaciones de mujeres han tenido un rol central al activar rutas de prevención y denuncia propias a través de mecanismos como el 'voz a voz', aplicativos móviles y radios comunitarias para la difusión de información y el acompañamiento psicosocial a mujeres víctimas de violencias.

# 2.1.4. "Llegan y les ofrecen plata para hacer mandados, y los jóvenes aceptan para ganarse la vida". Mujer líder, Urabá antioqueño

La situación de los jóvenes y su vinculación a redes de microtráfico y "pandillas" es otro fenómeno que causa preocupación. Esto se ha dado, en parte, por cuenta de las diferentes violencias que persisten, la exclusión histórica y las vulnerabilidades de distinto tipo. Desde el periodo que siguió a la desmovilización de las AUC, las dinámicas de violencia se concentraron en los centros urbanos del Eje Bananero. Habitantes de la región indican que, cuando se desmovilizó este grupo, hubo una disminución importante en la violencia. No obstante, se empezaron a presentar otras dinámicas que vinculaban y victimizaban sobre todo a los jóvenes.

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana al respecto en marzo de 2020, que advertía sobre el aumento de homicidios de jóvenes en lo corrido del año y el riesgo que afrontan<sup>22</sup>. Este escenario no solo expone a los y las jóvenes, sino también a sus familias y comunidades de origen.

<sup>22</sup> Defensoría del Pueblo. (2020). Alerta Temprana 008.

Desde que se fue a vivir con su abuela materna a los ocho años, Flor estuvo rodeada de mujeres líderes que luchaban en defensa de las mujeres víctimas de violencia sexual en el Urabá.

"Me empecé a interesar en el trabajo de mi abuela (...) Me he ido empapando y empoderando, haciendo diplomados y cursos con el propósito de salir adelante". Hoy Flor tiene 19 años y hace parte de la organización que la vio crecer. "Tengo todas las ganas de seguir luchando y defendiendo mis derechos y aprendiendo día a día para poder replicar a más personas".

Al reflexionar sobre la vinculación de jóvenes a redes de microtráfico en la región, Flor destaca:

"Cada vez son más los jóvenes que venden drogas (...) No hay oportunidades para ellos. Les dan 50.000 pesos para comer y al mes: "viene y hace lo que yo le diga o se mueren todos en su casa." O les dicen que les brindan empleo por allá en una finca, y ellos caen... ya estando allá, ¿qué más pueden hacer? (...) Matan a cinco jóvenes en un día y eso ya ni los medios lo comunican. Y nadie se atreve a preguntar. No le perdonan la vida a uno si se atreve a denunciar".

# 2.2.5. "Aunque viene desde las AUC, sigue saliendo a flote el problema de las tierras. Y a la gente la siguen amenazando".

Mujer líder, Urabá antioqueño

Las agresiones a líderes —particularmente a reclamantes de tierras—, han sido continuas en la región y a ellas se han sumado nuevos escenarios de riesgo por defender la implementación del Acuerdo de Paz y denunciar las dinámicas de microtráfico en los contextos urbanos.

El despojo de tierras, ligado a la incursión de actores armados y a la expansión de la agroindustria en los años 70, es una de las expresiones del conflicto armado que ha generado mayores afectaciones sobre la población. El Urabá ha sido una de las regiones del país más golpeadas por la disputa de la tierra, con aproximadamente seis millones de hectáreas despo-

jadas o abandonadas (siendo Turbo el municipio del país que, a septiembre de 2020, tenía más solicitudes de restitución<sup>23</sup>). Así, las reivindicaciones por la tierra y las garantías para el retorno se han situado como uno de los factores de mayor riesgo para líderes y lideresas.

Según datos de la FIP, si bien las agresiones a líderes no son un fenómeno que, haya incrementado en la región a partir de la firma del Acuerdo<sup>24</sup>, en municipios como Dabeiba --donde ha habido mayor movilización alrededor de la agenda de la paz- se han presentado amenazas de las AGC y el ELN a líderes que defienden su implementación y la participación política de los exintegrantes de las FARC<sup>25</sup>. Durante la implementación del Acuerdo, los liderazgos campesinos y de restitución de tierras han sido los más afectados en la región. En el caso de las mujeres, si bien las cifras no indican un aumento significativo, lideresas han advertido sobre amenazas a su labor. particularmente cuando asumen roles de denuncia frente a la explotación sexual, su seguridad y el microtráfico.

A esto se ha sumado la desconfianza de líderes y lideresas frente a la institucionalidad local, sobre todo al denunciar amenazas en su contra. Desconfianza que se ha sustentado en la percepción de la baja capacidad de respuesta para su protección, lo que ha robustecido los mecanismos de autoprotección comunitaria. En estos, se destaca el protagonismo de prácticas de autoprotección de mujeres líderes frente a los escenarios de riesgo.

<sup>23</sup> El Espectador. (2019). Lo que Urabá le contó a la JEP sobre el despojo de tierras. Obtenido de: https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/jep/lo-que-uraba-le-conto-la-jep-sobre-el-despojo-de-tierras-articu-lo-874638/; Unidad de Restitución de Tierras. (2020). Estadísticas Solicitudes Restitución Discriminadas Municipios.

<sup>24</sup> Base de datos de agresiones a líderes sociales de la FIP.

<sup>25</sup> Defensoría del Pueblo. (2019). Alerta Temprana 009.

Fomentar el empoderamiento económico y la participación de las mujeres ha sido central en la trayectoria organizativa de Yolima.

"Hemos trabajado mucho entre las mujeres. Lo más gratificante para mí ha sido ser parte de una red y ver cómo, desde ese proceso, logramos fortalecer mujeres en proyectos de vida, educación y formación. Cómo logramos reconocer la importancia de participar e incidir y tomar decisiones por dentro y por fuera del hogar".

Al referirse al ejercicio de liderazgo social en la región, destaca los riesgos asociados a la restitución de tierras y los mecanismos de autoprotección que han adoptado algunas mujeres de su organización:

"La gente pensó que iba a volver a sus tierras, pero no lo ha hecho por seguridad: los matan. Muchos otros no quieren volver (...) Con las compañeras pensamos que la mejor manera de protegerse es la una con la otra. Nos acompañamos y cuidamos. Y así hacemos. En la casa, mantenemos la puerta cerrada".

# 2.1.6. "No se sabe qué se está incumpliendo, pero hay una sensación de que se está incumpliendo". Mujer líder, Urabá antioqueño

Al hablar de procesos de paz, tanto líderes comunitarios como servidores públicos, empresarios y otros habitantes de la región se identifican o los asocian más a la desmovilización de las AUC que al Acuerdo de Paz firmado con las FARC. Territorialmente, las percepciones sobre el impacto del Acuerdo de Paz son más fuertes en municipios como Dabeiba, Mutatá, Vigía del Fuerte y Murindó, en los que las FARC tenían una mayor influencia antes y durante su desmovilización. Hacia el Eje Bananero, estas percepciones se hacen más diversas. En zonas rurales de municipios como Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo, también se perciben impactos positivos del Acuerdo, particularmente asociados a la reducción

de violencias, combates o impacto humanitario en general. El mayor contraste se encuentra en las zonas urbanas, donde los impactos del proceso de desmovilización de las AUC siguen siendo el hito histórico predominante en términos de construcción de paz.

En municipios como Dabeiba —donde se instaló el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR<sup>26</sup>) Jacobo Arango, y donde se han concentrado el 43% de las acciones para la materialización del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)<sup>27</sup>—, ha habido una movilización significativa de la agenda de paz. En las zonas urbanas de la región, ha tenido mayor incidencia el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNP), con la participación de organizaciones sociales. En la ruralidad hubo una participación nutrida alrededor del PDET, aunque los líderes del grupo motor han manifestado su preocupación por la falta de garantías para participar en este proceso.

En sintonía con el contraste entre desarrollo agroindustrial e inclusión social que caracteriza a la región, el diagnóstico regional realizado en el proceso PDET y consignado en el Plan de Acción para la Transformación Territorial (PATR<sup>28</sup>), reconoce las

<sup>76</sup> Tras la culminación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (lugares donde se concentraron inicialmente los excombatientes de las FARC), se iniciaron los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), que tenían el objetivo de capacitar y facilitar el tránsito de los excombatientes a la vida sivil.

<sup>27</sup> Estas incluyen obras PDET, proyectos productivos y obras por impuestos. El 57% restante de las acciones se han adelantado en los otros siete municipios que configuran la región del PDET Urabá antioqueño. Los PDET son programas subregionales de transformación integral del ámbito rural a 10 años, a través del cual se ponen en marcha con mayor celeridad los instrumentos de la Reforma Rural Integral en los territorios más afectados por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional. Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. (2020). Informe Gestión 2 años Paz con Legalidad: agosto 7/ 2018– agosto 31/2020.

<sup>28</sup> Cada PDET se instrumentaliza en un Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) construido mediante pactos comunitarios, étnicos y municipales. Los PATR materializan la planeación a 10 años y se deben revisar y actualizar cada cinco (5) años. Agencia Renovación del Territorio (ART). Página principal. Obtenido de: http://www.reincorporacion.gov.co/es/reincorporacion/PDET/PDET%20-%20General%20-%20Septiembre.pdf

brechas urbano-rurales. Las acciones avanzadas en la implementación del PDET, a agosto del 2020, corresponden a iniciativas productivas, de emprendimiento, infraestructura, saneamiento, medioambiente y educación rural<sup>29</sup>.

El PATR contempla también acciones para prevenir el reclutamiento de jóvenes, la reparación de víctimas, el ordenamiento territorial y la inclusión de población étnica y mujeres como ejes relevantes en el desarrollo territorial. En el caso de las mujeres, hubo una participación aproximada del 50% en el proceso PDET. Las mujeres rurales reconocen el proceso como participativo, a pesar de que la movilización alrededor de la implementación de las acciones PDET con enfoque de género no esté necesariamente en el centro de la agenda. El PATR incluye acciones que apuntan a proteger lideresas y a prevenir y atender violencias basadas en género, lo cual coincide con lo que mujeres líderes han destacado como elementos estratégicos para avanzar en la equidad de género.

Johana ha estado vinculada a distintos procesos organizativos a lo largo de su vida. Actualmente, hace parte de la Junta de Acción comunal de su barrio, así como de la mesa de víctimas de su municipio y del Comité de Impulso de reparación colectiva.

"La paz la venimos trabajando desde la ley 1448 y los Acuerdos de la Habana. La idea es seguir trabajando sin desfallecer. Seguimos tejiendo hilos de esperanza para lograr la paz en los territorios".

Desde su perspectiva, hay ciertos retos que afronta el Acuerdo de Paz:

"Hay municipios donde la gente se comprometió y hubo variedad de hombres y mujeres, pero hay poco nivel de recordación (...) Hay otros municipios donde los Acuerdos no han sido socializados, es algo que está corto. Hay lugares donde no tienen todavía claro qué es lo que nos corresponde o significa el Acuerdo de Paz (...) Las mujeres necesitan de acompañamiento con procesos productivos incluidos en los PDET".

2.1.7. "Cuando se desmovilizaron las AUC trabajamos con mujeres que las integraban. Algunas, luego, hicieron parte de las organizaciones. Eso está pasando con las de las FARC también. Con las venezolanas estamos tratando de trabajar".

Mujer líder, Urabá antioqueño

Las iniciativas de mujeres en la región tienen importantes antecedentes organizativos. La defensa de los derechos de las mujeres se ha enmarcado, en gran medida, en la reivindicación por la verdad, la justicia y la reparación, dado el nivel de victimización que sufrieron durante el conflicto. Estos aspectos han potenciado procesos organizativos de mujeres que han acumulado una experiencia relevante en la construcción de memoria y reparación a través de los diferentes procesos de paz.

Desde los años 90, los procesos organizativos de mujeres a nivel nacional concentraron esfuerzos en la denuncia y visibilización de la situación de las mujeres del Urabá. Justamente, uno de los hitos del movimiento colombiano de mujeres fue la movilización de 2.000 mujeres de todo el país hacia Mutatá, en 1996, donde presentaron un manifiesto por la paz y en contra de la guerra, hecho que se reconoce como el nacimiento del movimiento nacional Ruta Pacífica de Mujeres. La Iniciativa de Mujeres por la Paz también ha concentrado esfuerzos en la región a favor de la búsqueda de la verdad de las victimizaciones hacia las mujeres durante el conflicto armado.

A estos esfuerzos se sumaron luego el reconocimiento que dio la Ley 1448 a las mujeres como víctimas de violencias particulares en el conflicto a nivel nacional. El Acuerdo de Paz representó una nueva oportunidad en la región para la movilización de las mujeres y el impulso de su participación en la Comisión de la Verdad (CEV), la Jurisdicción Especial para

<sup>29</sup> Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. (2020). Informe Gestión 2 años Paz con Legalidad: agosto 7/2018- agosto 30/2020.

la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), con una experiencia acumulada regionalmente en torno a estos temas.

La trayectoria de estas organizaciones de mujeres ha sido importante para el proceso de reincorporación de mujeres excombatientes de las FARC, quienes se han articulado con sociedad civil, autoridades locales y cooperación internacional para adelantar acciones de integración comunitaria, economía solidaria y reincorporación económica con enfoque de género<sup>30</sup>, así como iniciativas a nivel regional para el fortalecimiento de las excombatientes en equidad de género.

Sin embargo, la región sigue teniendo desafíos en términos de garantías de seguridad. Organizaciones sociales han alertado sobre la estigmatización a excombatientes, ligada a los presuntos beneficios adquiridos con el Acuerdo de Paz. De igual forma, en Mutatá y Dabeiba hay riesgos de seguridad que han llevado a personas en proceso de reincorporación a abandonar el ETCR y el Área de Reincorporación<sup>31</sup>.

Las organizaciones de mujeres también han buscado vincular a población migrante, en particular a mujeres venezolanas que tengan vocación de permanencia en la región. En Urabá confluye la migración de población proveniente de Venezuela con la migración de tránsito por el tapón del Darién de personas que vienen de países del Caribe, África y Asia (esta última dinámica es la de mayor protagonismo). La vinculación de mujeres migrantes a las redes de explotación sexual puede exacerbar las vulnerabilidades que ya afrontan por su condición migratoria: estereotipos discriminatorios (en particular la asociación con la prostitución), que incrementan la probabilidad de sufrir violencia y acoso; relaciones desiquales de poder con parejas colombianas; amenaza de deportación; incremento de violencias basadas en género, y dependencia económica.

María Teresa es una mujer migrante venezolana que vive en el municipio de Carepa.

"Mi historia comienza desde los 15 años, cuando trabajaba mi liderazgo social y humanitario en Venezuela en compañía de mi madre, líder social igualmente".

Tras su llegada al Urabá, María Teresa se ha articulado con mujeres líderes de la región buscando mejorar las condiciones de vida de la población migrante.

"Mi sueño es un mundo justo sin fronteras. Entendernos desde nuestras propias historias: de lo que tú estás hecha y por lo que tú has pasado".

Al hablar de los retos en términos de garantía de derechos y seguridad que afronta la población venezolana en Urabá, María Teresa resalta:

"Está la problemática de la prostitución infantil, de vincular venezolanos a organizaciones delictivas, al consumo de drogas y otras cosas que se han movido en el territorio (...) En violencias contra la mujer se han hecho muchas omisiones, no han sido atendidos los casos. Las instituciones policiales no le dan la atención debida a las mujeres migrantes. No porque yo sea migrante, que yo llame a una institución y me digan que no me pueden apoyar (...) También hay xenofobia, discriminación".

<sup>30</sup> Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). (2019). En Mutatá (Antioquia), mujeres exintegrantes de las FARC-EP y de la comunidad fortalecieron herramientas para la ciudadanía. Obtenido de: http://www.reincorporacion.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/Paginas/2019/En-Mutat-mujeres-exintegrantes-de-las-Farc-Ep-y-de-la-comunidad-fortale-cieron-herramientas-para-la-ciudadania.aspx

<sup>31</sup> La Base de prensa de la FIP registró seis agresiones a excombatientes entre 2017 y 2019 en los municipios de Murindó (3), Carepa (1), Mutatá (1) y Dabeiba (1).

# 2.2. El Catatumbo

"El Acuerdo habla sobre la importancia que tenemos las mujeres en la construcción de paz, eso es una oportunidad. Es importante ahondar en derechos fundamentales de las mujeres y brindarles las herramientas para que exijan su cumplimiento".

Mujer líder, Catatumbo

Abordar los factores de fragilidad en el Catatumbo implica considerar diversas variables, así como las relaciones entre factores históricos de vulnerabilidad de la región, sus características geográficas, los ciclos recientes de violencia y las respuestas estatales. De manera general, las siguientes dinámicas se destacan como expresiones de la fragilidad territorial:

- Ha sido una región de diferentes reconfiguraciones de actores armados como el EPL, el ELN y las disidencias de las FARC, asociadas a la ubicación geográfica, los cultivos ilícitos y la producción de cocaína, la presencia del oleoducto caño limón Coveñas, la limitada presencia estatal y la baja capacidad de gobernanza local. Estas reconfiguraciones armadas han llevado a diferentes ciclos de violencia, que han producido un alto impacto humanitario durante la implementación del Acuerdo de Paz.
- Los municipios que componen la región del Catatumbo tienen altos niveles de ruralidad, así como altos índices de Pobreza Multidimensional rural que superan el promedio nacional. De igual forma, los bajos niveles en bienes y servicios básicos, y en vías de penetración, así como las barreras para el ordenamiento y el acceso a la tierra, han contribuido a que continúen la confron-

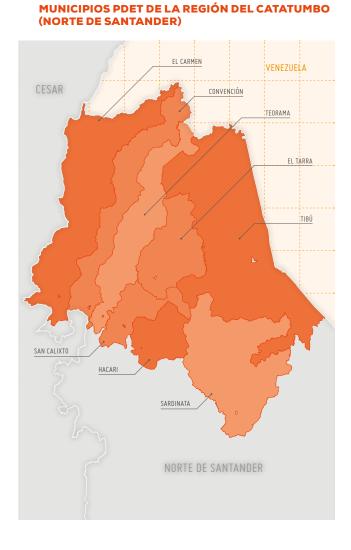
- tación armada, la afectación por los cultivos de uso ilícito y el impacto humanitario.
- · En este contexto de riesgos de seguridad, gobernanza local y vulnerabilidad socioeconómica, ha sobresalido la capacidad comunitaria gracias a diversas expresiones de organización social y experiencias para afrontar estas condiciones de fragilidad. Esto se ha constituido como un capital social para buscar soluciones a los rezagos del desarrollo territorial que, sin embargo, ha estado expuesto dada la alta vulnerabilidad de los líderes sociales durante el periodo de implementación del Acuerdo de Paz. Los liderazgos de mujeres han sido relevantes, aunque no necesariamente visibilizados y potenciados en conjunto con una agenda territorial de paz y equidad de género.

El Acuerdo de Paz ha sido un hito en la región, tanto en términos de reconfiguración del conflicto armado tras la desmovilización de las FARC, como de oportunidad de desarrollo territorial (aunque con diferentes matices, oportunidades y desafíos en los años de implementación). Durante el proceso de diálogo e implementación del Acuerdo, la región vivió una reconfiguración en varios niveles: por un lado, las dinámicas de los grupos armados; por otro, la apertura y retoma de agendas y demandas históricas alrededor del desarrollo territorial. De igual forma, la implementación coincidió con la intensificación del fenómeno migratorio proveniente de Venezuela.

En este contexto, los retos para la protección de las mujeres han sido la invisibilidad y la falta de información sobre sus afectaciones particulares en medio de la reconfiguración del conflicto armado, así como la limitada incorporación de medidas con enfoque de género para la seguridad y el desarrollo territorial. La protección de las mujeres frente a di-

námicas del conflicto y las violencias basadas en género es una de las preocupaciones en el corto plazo; a ella se suma el subregistro sobre estas violencias, por cuenta de las difíciles condiciones de acceso a canales de denuncia y judicialización. Esto ha implicado que la participación efectiva de las mujeres, sus liderazgos y sus garantías de seguridad, queden en un panorama difuso frente a otras demandas, tensiones y debates en la región.

MAPA 2



2.2.1. "Los espacios dejados por FARC fueron tomados por otros actores, lo que ha recrudecido el conflicto en la región. La dificultad de denunciar es de las cosas que más afecta a las mujeres". Mujer líder, Catatumbo

Mujeres líderes del Catatumbo identifican tres momentos históricos en los que, desde su perspectiva, la reconfiguración del conflicto ha tenido un impacto particular sobre ellas y ha marcado los ciclos de violencia que persisten:

Años 80 y 90. La violencia y presión de diferentes grupos armados propició el despojo de tierras y el desplazamiento hacia centros urbanos como Cúcuta, situación que generó la pérdida de prácticas y relaciones rurales. De manera paralela, las mujeres asumieron roles de liderazgo y jefaturas de hogar, aunque en un contexto de desigualdad de género para acceder a los recursos económicos.

"No me quedó más remedio que un 11 de abril empacar mi ropita con mi esposo y mis hijos e irme de mi tierra natal (...) Desplazarme a otra ciudad es lo más doloroso que he vivido". (Mujer líder, Catatumbo)

• Años 2005 a 2010. Si bien a partir de la desmovilización de las AUC se percibió la posibilidad de retornar a las zonas rurales y hubo expectativa frente a los procesos de reparación y memoria histórica, la violencia siguió activa: los grupos armados que permanecieron en el territorio continuaron generando un alto impacto en la población. El rol de las mujeres a nivel comunitario y familiar fue cobrando relevancia, debido a el reacomodo de las lógicas familiares por cuenta de la pérdida de jefaturas masculinas.

"Tras esta pérdida de relaciones sociales, las mujeres se enfrentaron a los 'señores de la guerra' y recriminaron la violencia que ellos alimentaban a diario". (Mujer líder, Catatumbo)

• Acuerdo de Paz con las FARC. Tras la desmovilización de las FARC, las guerrillas del ELN y el EPL entraron en un proceso de disputa y reacomodo por el control territorial, lo que incrementó las amenazas, asesinatos y desplazamientos masivos, entre otras afectaciones. Según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en 2018 se presentó la segunda mayor afectación humanitaria en la región, después de 2002: 165.502 personas afectadas por el conflicto y la violencia armada<sup>32</sup>.

"Lamentablemente es la realidad: uno de los actores armados se va del territorio, pero empiezan todas estas disputas territoriales (...) comienzan a verse estos espacios y estos enfrentamientos, así como la agudización de la violencia". (Mujer líder, Catatumbo).

2.2.2. "Vivimos en una región que siempre ha vivido el conflicto y el reclutamiento forzado a los jóvenes (...) hay muchos que toman diferentes decisiones y a uno le duele eso. Los más afectados somos los campesinos y los líderes sociales". Mujer líder, Catatumbo

Tras el fin de la negociación con las FARC y el primer año de la implementación del Acuerdo, el Registro Único de Víctimas (RUV)<sup>33</sup> reportó una reducción en el número de víctimas por desplazamiento forzado respecto al periodo de negociación con las FARC (2012- 2016). Sin embargo, para 2018 y 2019, la cifra aumentó en un 356% respecto al año anterior. Por su parte, el sequimiento de OCHA registró que,

entre 2016 y 2018, hubo un aumento progresivo<sup>34</sup> en el número de desplazamientos y confinamientos<sup>35</sup>, aunque en 2019 se presentó una reducción del 428%. Estas dinámicas cambiantes han respondido a la reconfiguración armada que ha vivido la región.

Las dinámicas de desplazamiento son una consecuencia de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y los combates con la Fuerza Pública. Los desplazamientos también se han producido a causa del amedrentamiento a líderes sociales y la estigmatización de comunidades acusadas de ser colaboradoras de grupos ilegales o de la Fuerza Pública. El confinamiento también ha representado una preocupación reciente: las condiciones de difícil acceso a la asistencia humanitaria han llevado a procesos de retorno sin garantías de seguridad para las comunidades.

A inicios de 2020, la situación de seguridad del Catatumbo volvió a mostrar una degradación debido a la declaración de paro armado del EPL y el ELN, que produjo confinamientos y desplazamientos. Durante las medidas de aislamiento adoptadas de cara al covid-19, las afectaciones humanitarias por conflicto armado continuaron y se ha percibido un ma-

- • •
- 32 OCHA. (31 diciembre de 2018). Reconfiguración de la situación humanitaria en 2018. Obtenido de: https://www.humanitarianresponse.info/sites/www. humanitarianresponse.info/files/documents/files/190610\_infografia\_rec onfiguracion\_situacion\_humanitaria\_en\_norte\_santander\_vf.pdf
- 33 Unidad de Víctimas (2020). Red Nacional de Información-Desplazamiento Norte de Santander. Obtenido de: https://cifras.unidadvictimas.gov.co/ Home/Desplazamiento
- 34 OCHA (2020). Situación Humanitaria y doble afectación en la región de Catatumbo (Norte de Santander) Obtenido de: https://reliefweb.int/report/colombia/situaci-n-humanitaria-y-doble-afectaci-n-en-la-regi-n-del-catatumbo-norte-de
- 35 Según OCHA, "una población se encuentra confinada cuando sufre limitaciones a su libre movilidad por un período igual o superior a una semana y, además, tiene acceso limitado a tres bienes, servicios básicos o asistencia como: alimentos, educación, salud, agua y saneamiento, medios de vida, entre otros". OCHA (2015). Acceso humanitario, limitaciones de movilidad y confinamiento. Obtenido de: https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/150427\_confinamiento nota conceptual.pdf

yor control por parte de actores armados. En 2020, las acciones se han concentrado, principalmente, en los municipios de Tibú (43%), Convención (13%), Hacarí (13%) y San Calixto (10%)<sup>36</sup>.

Para los líderes sociales de la región, son de especial preocupación las amenazas y la obstaculización de su labor de liderazgo por parte de grupos armados ilegales. Las organizaciones sociales han denunciado estigmatización e intimidación, lo que ha generado la pérdida de liderazgos —en particular en las Juntas de Acción Comunal— así como su desplazamiento hacia Cúcuta u otras ciudades del país buscando protección. Los líderes de diferentes sectores sociales han manifestado la necesidad de una mirada diferente en el abordaje de la protección, teniendo en cuenta las particularidades de las dinámicas de líderes indígenas, mujeres, comunales, de sustitución de cultivos ilícitos y campesinos.

El reto que persiste alrededor de las garantías de seguridad de las comunidades se extiende también a la población migrante y excombatientes de las FARC. A diciembre de 2019, el Ministerio de Relaciones Exteriores reportó cerca de 15.000 venezolanos en la región de Catatumbo, una proporción del 6,8% respecto del total que se registra en Norte de Santander. Human Rights Watch ha alertado sobre la condición de vulnerabilidad de esta población, debido a su conocimiento limitado sobre las dinámicas del conflicto armado colombiano y sus necesidades de sobrevivencia<sup>37</sup>.

En diferentes períodos del conflicto armado en la región —y en particular en el contexto reciente— el reclutamiento forzado y la situación de seguridad de las mujeres han representado una especial preocupación. En un contexto de precario acceso a servicios y oportunidades de educación y trabajo, la población joven de la región enfrenta opciones limitadas. Lo anterior, sumado al interés de actores armados ilegales, genera condiciones que favorecen las dinámicas de reclutamiento forzado de niños, ni-

ñas, jóvenes y adolescentes, así como la utilización de población civil por parte de grupos ilegales.

Durante la pandemia del covid-19 las dinámicas de reclutamiento han persistido, constituyéndose como un escenario de vulnerabilidad para niños, niñas y adolescentes en la región. Como resalta un informe reciente de la FIP<sup>38</sup>, organizaciones territoriales han percibido un incremento en el reclutamiento forzado de menores en los meses de confinamiento. A este escenario, se suman los altos niveles de subregistro.

Iniciativas productivas y de construcción de redes juveniles que fomentan el liderazgo para la paz, son experiencias locales que buscan visibilizar oportunidades para la población joven y articular esfuerzos de cooperación e institucionalidad local para prevenir el reclutamiento. Para las lideresas de la región participantes de La Incubadora, esta es una agenda prioritaria, por lo que sus procesos organizativos también se han orientado a la protección de niños, niñas y adolescentes del Catatumbo. Desde su perspectiva, generar condiciones para un liderazgo propositivo en las nuevas generaciones podrá garantizar que, a pesar de la recurrente violencia, las comunidades de base sigan construyendo estrategias de afrontamiento que contribuyan a proteger a los jóvenes.

<sup>36</sup> Base de prensa de acciones del conflicto de la FIP.

<sup>37</sup> Human Rights Watch (2019) La guerra en el Catatumbo: Abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia. Recuperado en: https://www.hrw.org/es/report/2019/08/08/la-guerra-en-el-catatumbo/abusos-de-grupos-armados-contra-civiles-colombianos-y

<sup>38</sup> Fundación Ideas para la Paz (2020). Desafíos y respuestas urgentes al reclutamiento forzado de menores de edad.

Rosa es una mujer joven líder en la zona rural de San Calixto. Junta a ella, varias mujeres han trabajado en proyectos productivos para el empoderamiento económico de las mujeres en su municipio. Desde sus iniciativas productivas, Rosa y las mujeres que la acompañan se han preocupado por las garantías de seguridad de la población civil, en particular de sus hijos e hijas.

La percepción de Rosa y varias mujeres en el Catatumbo sobre la situación de impacto humanitario ha sido que:

"El narcotráfico, las violencias basadas en género y el peligro latente que corren los líderes sociales es bastante complicado para su seguridad. A pesar del Acuerdo de Paz, no se han consolidado espacios y escenarios que permitan y garanticen la participación y la vida de los líderes y lideresas. Para los jóvenes tampoco hay seguridad y las mujeres viven con temor de que para los hijos la única solución sea que se vayan a las guerrillas. Nosotras somos las mamás, somos las que más sufrimos en la guerra, nos dejan viudas, huérfanas, sin hijos, hemos sido el paño de lágrimas de las demás compañeras. Es importante rescatar que en la región hay muchísimo talento y varias organizaciones entidades y universidades han ayudado mucho a que los jóvenes participen".

2.2.3. "Muchas mujeres se han dedicado a realizar actividades (en los cultivos de coca) como 'raspachinas' o ayudantes en la cocina. Por el desempleo que vivimos dentro de la región, esta ha sido una de las maneras para conseguir el sostenimiento de las familias".

Mujer líder, Catatumbo

Las condiciones de vulnerabilidad económica de la región han enmarcado la situación de las mujeres rurales en el Catatumbo. No solamente se evidencia una vulnerabilidad mayor frente a otras zonas PDET y otros departamentos, sino un impacto diferenciado de dichas condiciones en las mujeres. Para 2018, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en Norte de Santander fue de 57,7 para las zonas rurales y de 27,2 para las urbanas, mientras que la pobreza monetaria estuvo 14,7 puntos porcentuales por encima del promedio nacional<sup>39</sup>. Igualmente, el índice sintético

de condiciones de vida de la población rural dispersa en los municipios PDET de la región del Catatumbo fue de 69,9%, mientras que el índice promedio para todas las zonas PDET fue de 59,3%<sup>40</sup>.

Estas vulnerabilidades se presentan de manera más pronunciada en las mujeres. En 2018, en Norte de Santander, el porcentaje de mujeres que se encontraban bajo el umbral de pobreza fue de 42,4%, mientras que el promedio nacional fue de 26,9% para la población total<sup>41</sup>. La brecha entre hombres y mujeres en la tasa de desempleo del departamento fue de 5,5 en 2019, cifra que ha ido en aumento en el último año.

Estas vulnerabilidades se anclan en las limitadas oportunidades económicas, de autonomía y empoderamiento, así como en la falta de garantías de seguridad desde un lente diferencial para las mujeres, condiciones que llevan a la vinculación a economías ilegales.

La presencia de cultivos ilícitos de coca ha sido una de las aristas de las conflictividades sociales en la región y de profundización de tensiones entre comunidades y Estado. Una de las mayores expectativas sobre la implementación del Acuerdo de Paz estuvo, justamente, relacionada con la puesta en marcha del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Desde el enfoque de género, la sustitución de cultivos también planteó diversas expectativas, considerando que en Catatumbo, así como en otras regiones del país, las mujeres están vinculadas al cultivo y procesamiento de la hoja de coca, asumiendo riesgos particulares asociados a violencias basadas en género y la profundización de vulnerabilidades sociales y económicas<sup>42</sup>.

<sup>39</sup> DANE. (2018). Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV).

<sup>40</sup> DANE. (2014) Censo Nacional Agropecuario (CNA) \*Nota: A mayor índice, mayor proporción de hogares con privaciones.

<sup>41</sup> DANE. (2018). Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

<sup>42</sup> Fundación Ideas para la Paz (2017). Mujeres y la economía cocalera en el Putumayo: roles, prácticas y riesgos.

La implementación del PNIS en la región tuvo diversos desafíos desde sus comienzos<sup>43</sup>. Entre ellos que, como lo ha mencionado UNODC, aunque más de una cuarta parte de la coca se encuentra en Catatumbo, solo el 3 % de los beneficiarios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) se focalizaron en este núcleo<sup>44</sup>.

Uno de estos —como se ha identificado para otras regiones— fue la incorporación de medidas concretas del enfoque de género que permitieran la inclusión efectiva de las mujeres en el programa, así como medidas diferenciales que apuntaran a prevenir las violencias y fomentaran el empoderamiento económico. Según datos de UNODC, se ha identificado que a nivel nacional la composición familiar de los beneficiaros del programa tienen una importante participación de mujeres y jóvenes<sup>45</sup>.

De manera paralela a la implementación del programa, los cultivos de coca tuvieron un incremento en la región; esa situación ha demandado más mano de obra que se ha cubierto, en gran medida, con la población migrante proveniente de Venezuela. El último informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), reportó que, en 2019, Norte de Santander fue el departamento con mayor registro de cultivos ilícitos en el país, con un aumento del 24% con relación a 2018. El informe señaló que, para 2019, en Catatumbo se registraron 41.749 hectáreas de coca, de las cuales 20.000 se concentraron en Tibú<sup>46</sup>. En este contexto, las dinámicas del cultivo de coca, la "raspa" y la producción en general, siguen constituyéndose como una de las opciones de sostenimiento económico para las mujeres campesinas y migrantes, quienes se vinculan en diversos roles como "raspachinas", cocineras o ayudantes, y se mueven entre cultivos en el bajo y medio Catatumbo.

Además, las dinámicas de frontera en el último año—sobre todo el fortalecimiento de las economías ilegales y la influencia de los grupos armados ilegales—, han generado alertas sobre la profundización de vio-

lencias asociadas a la trata de personas, en particular la explotación sexual de mujeres migrantes.

Marisol es una mujer de 32 años nacida en el Catatumbo que hace parte de una organización que promueve proyectos productivos para mujeres. Actualmente, trabaja con mujeres caficultoras jefas de hogar. Marisol retrata que desde su niñez se ha enfrentado a vulnerabilidades económicas, como otras mujeres de la región; situación que, en algunos casos, las lleva a vincularse al cultivo de coca:

"Yo he sido una mujer que desde niña, cuando apenas tenía 10 añitos, me tocaba trabajar para ayudar a mis padres. Me tocó comenzar a trabajar para ayudarle a mi papá porque él no daba abasto, no tenía finca. Todos nosotros nos criamos trabajando. Y muchas veces, como hay falta de oportunidades, como me tocó a mí, las mujeres viven del cultivo ilícito, son raspachinas, cocinan en los laboratorios. Esas son a veces las únicas oportunidades para sostener a las familias. Muchas son madres cabeza de hogar y desplazadas. Eso aquí ha sido histórico y ahora está el tema de las peleas por la sustitución. La inseguridad de los territorios afectados por los cultivos ilícitos es incumplimiento también del Acuerdo, en parte".

<sup>43</sup> Fundación Ideas para la Paz (2020). ¿En qué va la implementación del Acuerdo de Paz en la región del Catatumbo?

<sup>44</sup> UNODC. 2020. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2019. Obtenido de:https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colom-bia/Colombia\_Monitoreo\_Cultivos\_Ilicitos\_2019.pdf

<sup>45</sup> Fundación Ideas para la Paz. (2018). ¿Quiénes son las familias que viven en las zonas con cultivos de coca?

<sup>46</sup> UNODC. Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI). (2019). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos.

2.2.4. "El incumplimiento de los puntos del Acuerdo está dejando un mal mensaje. Hay unos factores externos, no propiamente de la región, sino en lo que concierne a la responsabilidad que tiene el Gobierno Nacional (...)".

Mujer líder, Catatumbo

El proceso de paz con las FARC fue percibido en la región como una nueva oportunidad para recoger agendas históricas y solucionarlas a través de las medidas pactadas en el Acuerdo. La implementación se percibió como un punto de partida para concretar una agenda de desarrollo territorial que recogiera conflictividades históricas. En este contexto, procesos organizativos de base —en particular de mujeres y Juntas de Acción Comunal— aprovecharon la ventana de oportunidad que abrió el Acuerdo de Paz para potenciar y visibilizar sus liderazgos y organizaciones.

A pesar de las difíciles condiciones de seguridad que empezaron a intensificarse durante la implementación del Acuerdo, procesos como la firma de acuerdos colectivos e individuales para la sustitución de cultivos en el PNIS, el proceso participativo del PDET o la reincorporación temprana de excombatientes en la Zona Veredal de Caño Indio en Tibú (posteriormente ETCR), contaron con un importante impulso en las etapas tempranas de implementación, y con apoyo de diferentes sectores sociales, económicos y políticos a nivel local. La participación comunitaria se destacó en el proceso PDET; la sustitución de cultivos ilícitos contó con el respaldo de organizaciones campesinas y autoridades locales; y el proceso de reincorporación generó también un interés entre las comunidades para impulsar procesos de verdad justicia y reparación.

Este impulso temprano de la implementación empezó a verse afectado por capacidades institucionales limitadas que generaron retrasos, además de la reconfiguración de actores armados, la presión e influencia de la crisis venezolana y el deterioro de la seguridad. Se generaron diferentes tensiones alrededor de la sustitución de cultivos ilícitos y las garantías de seguridad de las comunidades, líderes sociales y excombatientes. En este contexto, la agenda de desarrollo territorial de mediano y largo plazo se superpuso con necesidades humanitarias inmediatas de la región y la situación de seguridad.

El cambio de Gobierno en 2018 marcó una nueva etapa de tensión alrededor del Acuerdo de Paz, pues las comunidades empezaron a cuestionar con mayor fuerza la respuesta militar del Estado frente a la precaria atención que se dio a las necesidades estructurales de la región. Sumado a esto, medidas con enfoque de género y étnico contempladas en el Acuerdo, empezaron a generar mayor preocupación por su retraso.

Desde la reflexión de mujeres líderes participantes de La Incubadora, este proceso ha dejado ver que hay factores internos y externos de la región que obstaculizan de manera recurrente iniciativas como el Acuerdo de Paz. A nivel local, hay dinámicas históricas del territorio, como la presencia de grupos ilegales que encuentran condiciones propicias para el reclutamiento, las economías ilegales y la dependencia de las comunidades frente al cultivo de coca en algunas zonas. Más allá de lo local persisten factores como la desconfianza y desconexión con la institucionalidad nacional, y lo que se percibe como presión por parte de agendas "que vienen de afuera" (como la fumigación con glifosato), y un clima político polarizado.

Una nueva oportunidad, a propósito de la implementación del Acuerdo de Paz y la política "Paz con Legalidad" del gobierno Duque, surgió con el plan Catatumbo Sostenible y Zonas Futuro, como respuestas institucionales en temas de desarrollo rural y productivo, y seguridad y justicia. Organizaciones internacionales y autoridades locales identifican

como un avance positivo la creación de estrategias articuladoras de las iniciativas a implementarse en la región; sin embargo, se ha cuestionado la falta de claridad que aún hay en las comunidades.

Estos planes han sido un nuevo punto de tensión entre las comunidades y el Gobierno Nacional. Por parte de las comunidades, se percibe que los planes distorsionan o transforman la esencia de las iniciativas PDET; por parte del gobierno, se insiste en que estas estrategias han representado la mayor inversión y apuesta que ha liderado el Estado colombiano sobre la región.

Según la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, algunas de las acciones que se han planteado en Catatumbo Sostenible están relacionadas con la formalización de la tierra y la actualización de datos sobre su uso y propiedad, linderos y predios. Igualmente, se contempla la asignación de recursos para ejecutar proyectos productivos de cultivos sostenibles, así como su encadenamiento productivo<sup>47</sup>. No obstante, en el plan no queda clara la estrategia de equidad de género, si bien se contempla e impulsa la inclusión de las mujeres en los programas de titulación de tierras y los proyectos productivos.

A lo anterior se ha sumado el covid-19 y las medidas para su contención, que han generado un reto adicional al proceso de implementación: 1. Se han profundizado tensiones debido a la erradicación forzada que adelanta el Gobierno Nacional y el posible uso de la fumigación con glifosato; 2. Hay preocupación en las comunidades por los impactos presupuestales que la atención a la crisis sanitaria pueda traer a la implementación del Acuerdo; 3. Durante los meses de aislamiento hubo menor capacidad de denuncia y visibilidad de la situación humanitaria y limitaciones para su atención por parte de instituciones del Estado y cooperación; 4. Los impactos del aislamiento para las mujeres se perciben como ma-

yores entre las comunidades rurales, en particular por el aumento de las labores del cuidado, las afectaciones económicas sobre los proyectos de mujeres y la falta de territorialización de medidas afirmativas que potencien el empoderamiento de las mujeres y la prevención de violencias.

Lucía es una mujer campesina del municipio de Sardinata. Desde hace años ha promovido los derechos por la tierra en la región del Catatumbo y tiene una preocupación constante por el impacto del punto 1 de Reforma Rural Agraria en las mujeres campesinas, así como las posibilidades de una salida negociada a la confrontación con otros grupos armados.

"Hemos tenido dificultades para la pedagogía e implementación del Acuerdo de Paz. No ha sido completa pues conocemos muy poco de los cinco puntos del Acuerdo; no tenemos conocimiento a fondo del papel que juegan las mujeres en cada uno de ellos. No sabemos hasta qué punto tenemos responsabilidad los campesinos y las mujeres en la implementación de los puntos del Acuerdo de Paz pues, a pesar de que nos tuvieron en cuenta, no se han cumplido. El incumplimiento generalizado de los puntos del Acuerdo está dejando un mal mensaje para los demás grupos. Además de la negativa que se llegue también a un eventual acercamiento o diálogo con los demás grupos".

<sup>47</sup> Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación (2020). Informe de qestión 2 años Paz con Legalidad agosto 7, 2018- agosto 21, 2020.

# 2.2.5. "Aunque termine el conflicto armado seguimos enfrentando discriminación, violencias y falta de participación. No se nos cuentan los derechos". Mujer líder, Catatumbo

El Acuerdo de Paz ha representado una oportunidad en términos de equidad. Sin embargo, la falta de claridad y los pocos avances sobre el enfoque de género en la implementación y sus programas, generan preocupación en las mujeres líderes sobre las brechas más estructurales. Desde su perspectiva, la pobreza, la discriminación, las violencias basadas en género y la limitada participación, seguirán estando presentes en la región si no se adelantan medidas de mediano y largo plazo.

En el corto plazo, la protección de las mujeres frente a las dinámicas del conflicto y violencias de género son una prioridad. Los grupos armados ilegales han estado vinculados a hechos de violencia sexual de diferente tipo, pero también hay dinámicas de violencia sexual a nivel intrafamiliar. Las organizaciones internacionales han insistido en que esta distinción puede no ser del todo clara en la región, considerando la influencia de los grupos ilegales en las comunidades, incluso en dinámicas familiares. Human Rights Watch ha alertado, justamente, que "es difícil separar la violencia intrafamiliar de las acciones de grupos armados en una zona donde estos grupos ejercen tanto poder"48. A eso se suma el subregistro de estas violencias, dadas las difíciles condiciones de acceso a canales de denuncia y judicialización. Un ejemplo de esto último es que ningún municipio de la región cuenta con casas refugio para víctimas de violencias basadas en género.

En el mediano y largo plazo se encuentran retos más estructurales, como la autonomía económica de las mujeres. En la región, una de las principales limitaciones para su empoderamiento económico y la sostenibilidad de sus proyectos productivos ha sido el bajo acceso a la tenencia de la tierra. A nivel

nacional, aún hay limitaciones a pesar del avance en el marco legislativo que prioriza a las mujeres en el acceso y formalización de la tenencia de la tierra.

Ana es una joven que ha participado en la lucha de los derechos económicos de las mujeres. Actualmente, se encuentra desempleada tras haber tenido que renunciar a su trabajo como maestra rural por un episodio de violencia. Ana considera que la ausencia de denuncias de las violencias basadas en género y de garantías de participación para las mujeres es uno de los mayores problemas en la región:

"Creo que ese ejercicio de denuncia y esa palabra de las violencias basadas en género es uno de los aspectos que me salta muchísimo más porque en el Catatumbo, a pesar de que ha ocurrido todo un proceso organizativo, histórico y de movilización social, todavía no se alza la voz de esa manera, no se hace. En mi municipio, por ejemplo, no hay una oficina para la mujer. Las mujeres acá son bastante reservadas en la cuestión de la violencia. No hay ese enlace de comunicación para que ellas suelten ese temor, que encuentren ese canal de comunicación, no lo utilizan. Aunque termine el conflicto armado seguimos enfrentando discriminación, violencias, empobrecimiento, falta de participación, no se nos cuentan los derechos, maltrato psicológico y falta de oportunidades por parte del Estado. Me gusta trabajar por las mujeres y que se valoren que no tenemos por qué permitir que nos maltraten".

<sup>48</sup> Human Rights Watch. (2019) La Guerra en el Catatumbo. Abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia.

# 2.2.6. "Necesitamos generar una discusión sostenida en el tiempo, que se vaya a diferentes espacios, a la sostenibilidad de los procesos organizativos de mujeres, sobre todo los de las mujeres rurales". Mujer líder, Catatumbo

Una de las principales limitaciones de la sostenibilidad de los procesos organizativos y productivos de las mujeres, así como su situación de seguridad, ha sido la falta de articulación de iniciativas dirigidas a esta población y los sistemas de información que permiten conocer las zonas y ámbitos prioritarios de intervención para prevenir las violencias basadas en género. En la región, las dinámicas recientes de conflicto limitan el acceso a información sobre la situación de las mujeres, y hay una baja visibilidad de sus procesos organizativos, así como de las acciones que se adelantan.

Frente a esto, mujeres líderes participantes de La Incubadora han señalado que, en la implementación, son claves los espacios de interlocución y participación efectiva de las mujeres con la institucionalidad local y nacional. Si bien los debates se han concentrado en la situación humanitaria —la cual es prioritaria—, las discusiones y la agenda de seguridad territorial no necesariamente focalizan aspectos particulares de la situación de las mujeres en el conflicto y la violencia persistente.

En este sentido, en la región cobran especial relevancia las garantías de participación efectiva de las mujeres en instancias de construcción de paz, planeación territorial y seguridad, de manera que empiecen a discutirse posibles medidas de protección para ellas, así como el diseño de políticas territoriales para avanzar en términos de equidad. Al respecto, se destaca el capital organizativo de mujeres que ha permitido la implementación del Acuerdo de Paz, la formación de liderazgos de base, y diferentes iniciativas de articulación para el trabajo en torno a la equidad de género entre institucionalidad, cooperación y sociedad civil.

Elena es una mujer que lidera una organización con presencia en varios municipios del Catatumbo. Desde su vida profesional, Elena ha apostado por fortalecer escenarios de participación y, sobre todo, por la inclusión de las mujeres. En el marco del Acuerdo, ha identificado oportunidades, pero también desafíos para la formación ciudadana de los habitantes de la región, de manera que puedan potenciar escenarios participativos.

"En Catatumbo, pese a que las mujeres ya han logrado participar, cuando se forman espacios de participación todavía se refleja muy baja participación femenina, como también en todo el tema de implementación de los Acuerdos de Paz y el PDET. Creo que el enfoque de género aún hace falta, en donde las mujeres tengan espacios de participación y de diálogo, conociendo las perspectivas sobre la implementación. Las mujeres juegan un papel importante pero no son visibilizadas".



# 3. Del Catatumbo al Urabá, del Urabá al Catatumbo: ¿Cómo potenciar agendas territoriales de paz, equidad de género y seguridad en medio de la fragilidad?

"Las mujeres toman decisiones dentro y fuera del hogar cuando llegan a ser parte de una junta de acción, o de los Consejos Territoriales de Planeación, o los Consejos Municipales de Paz. Yo considero que la participación, el empoderamiento y la incidencia es un acto de resistencia y de resiliencia de las mujeres".

Mujer líder, Urabá antioqueño

Las discusiones que se han dado en el país en torno a las mujeres, la equidad de género y la paz, son diversas. A 20 años de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad<sup>49</sup>, Colombia ha tenido hitos relevantes sobre el tema. El enfoque de género en el Acuerdo de Paz es reconocido internacionalmente, pero aun así persisten retos asociados a las particularidades regionales, las capacidades locales y los legados y transformaciones del conflicto armado en su etapa de implementación.

Si bien la implementación del Acuerdo ha traído beneficios para las mujeres a nivel territorial, las disposiciones de género son uno de los componentes más rezagados<sup>50</sup>. Esto se ha derivado de diferentes desafíos, entre los cuales están las limitaciones para territorializar el enfoque de género en medidas concretas. Una limitación que no ha sido particular del Acuerdo de Paz, pues también ha sido un reto para políticas que se proponen transversalizar este enfoque en las acciones de política pública.

Frente a esto, resulta pertinente insistir en las lecturas territoriales de la equidad de género y la identificación de lo prioritario, lo posible y lo pertinente, y cómo esto puede traducirse en acciones concretas que, además de medidas afirmativas, consideren iniciativas estratégicas en términos de equidad de género y en beneficio de toda la población (como la infraestructura de cuidado y la apertura de espacios participativos, entre otras).

El rezago en las medidas de género a cuatro años de la implementación del Acuerdo de Paz, lleva a la necesidad de elevar alertas e insistir en que se hagan reales estas disposiciones, como ya lo han planteado organizaciones de mujeres y cooperación internacional. Sin embargo, es necesario también pensar en las iniciativas de paz y equidad de género que ya existen en los territorios —en muchos casos al margen del Acuerdo de Paz—, para potenciarlas y contribuir al avance de acciones de la implementación.

Al respecto, también se destacan logros, aún no cuantificados o visibilizados, que ha traído el Acuerdo en las regiones para los liderazgos y procesos organizativos de mujeres. En La Incubadora, se ha identificado que, tanto en Urabá como en Catatumbo, el Acuerdo permitió abrir agendas de trabajo para el desarrollo territorial, y el surgimiento de diversidad de liderazgos y espacios de interlocución con instituciones del Estado. Para las mujeres líderes en estas

<sup>49</sup> La Resolución 1325, publicada en el año 2000 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), modificó el estatus de las mujeres en contextos de conflicto e incluyó la perspectiva de género, estableciendo la Agenda "Mujeres, Paz y Seguridad" (MPS). Así, las mujeres dejaron de considerarse solamente un grupo vulnerable y pasaron a formar parte de las estrategias de construcción de paz de manera activa. Cohn, Arol. (2004). Feminist Peacemaking: In Resolution 1325, the United Nations Requires the Inclusion of Women in All Peace Planning and Negotiation. En: The Women's Review of Books. Vol. 21, no 5, p. 8–9.

<sup>50</sup> GPAZ. (2019). La paz avanza con las mujeres. Observaciones sobre la incorporación del enfoque de género en el Acuerdo de Paz. KROC. (2020). Hacia la implementación del enfoque de género en el Acuerdo Final de Paz de Colombia: avances, oportunidades y retos. III Informe de seguimiento al enfoque de género en la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia.

regiones, esta ha sido una oportunidad de formación de liderazgos y de formulación de agendas de trabajo en torno a la equidad.

El rol de las mujeres para alcanzar la paz en estos contextos de fragilidad priorizados para la implementación del Acuerdo, no ha sido menor. Sus agendas locales, que atienden a necesidades prácticas de las comunidades y sus familias (proyectos productivos, participación comunitaria), se han tejido con intereses estratégicos en torno a la visibilidad de vulnerabilidades particulares, el impulso de iniciativas de desarrollo territorial y la articulación de actores empresariales e institucionales, entre otras. Esto ha situado las agendas, iniciativas y experiencias de las mujeres, como factores de protección que han sido claves para hacer frente a las expresiones de fragilidad que persisten.

En La Incubadora, los procesos de organizaciones de mujeres en estas regiones han identificado, junto a la FIP, la necesidad de seguir profundizando en lecturas territoriales sobre los obstáculos y oportunidades del Acuerdo de paz y las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres, pero también de las potencialidades de sus experiencias de resiliencia, desde las cuales tienen perspectivas y propuestas sustentadas en sus vivencias territoriales.

En estas regiones hay una serie de elementos y capacidades territoriales que pueden protegerse, incubarse y potenciarse para hacer frente a las expresiones de fragilidad territorial.

### En el caso de Urabá, se destacan:

 Experiencias y posibilidades de articulación multisectorial: En la región persisten tensiones entre comunidad-estado-empresas derivadas de legados del conflicto armado y del contraste entre el desarrollo económico auspiciado por la agroindustria y la inclusión social. No obstante —en particular en el Eje Bananero— ha habido procesos de interlocución entre sociedad civil, autoridades locales, academia, cooperación internacional y sector empresarial que han permitido adelantar acciones conjuntas en pro del desarrollo territorial, la prevención y la atención de las violencias basadas en género, entre otros. Aunque los procesos de verdad, justicia y reparación siguen siendo uno de los desafíos centrales, las posibilidades de articulación multisectorial son una oportunidad para aliviar tensiones históricas ligadas al conflicto armado y fortalecer procesos que apunten al desarrollo territorial y la equidad de género.

· Experiencia organizativa de los procesos de mujeres: La experiencia que han acumulado los procesos organizativos desde la década del 90, en línea con los distintos procesos de paz y desarme vividos en la región, ha fortalecido los liderazgos y los ha cohesionado en torno a la garantía de derechos, procesos de verdad, justicia y reparación, y la prevención de violencias basadas en género. Esto ha sido clave para afrontar distintas expresiones de fragilidad territorial; a su vez, para integrar a mujeres excombatientes y, más recientemente, a mujeres migrantes a procesos organizativos locales y ejercicios de reconciliación e integración comunitaria. La experiencia acumulada de los procesos de mujeres ha contribuido a posicionar la agenda de género en la región, y se han articulado aliados institucionales y de cooperación internacional en esta dirección. Potenciar los procesos organizativos de mujeres es una oportunidad para materializar la agenda de género y la construcción de paz en la región.

· Trayectoria organizativa alrededor de la prevención y atención a las violencias de género: Dentro de los procesos organizativos de mujeres ha habido un liderazgo significativo alrededor de la prevención y atención a violencias basadas en género, lo cual ha sido clave para la protección de las mujeres en la región. Esto se ha traducido en estrategias comunitarias de prevención y atención a partir de herramientas como el 'voz a voz', aplicativos móviles y radios comunitarias, así como en la interlocución con autoridades locales para potenciar canales de respuesta institucional. Capitalizar la experiencia local en términos de prevención y atención se presenta como una oportunidad para avanzar en acciones que protejan las mujeres.

### En el caso de Catatumbo, se destacan:

· En la región se han concentrado esfuerzos institucionales y de cooperación internacional a propósito de la implementación del Acuerdo de Paz: A pesar de las diversas tensiones alrededor de los rezagos y desafíos de la implementación del Acuerdo de Paz, la región ha sido priorizada por el Gobierno Nacional en diferentes estrategias de seguridad y desarrollo territorial. Igualmente, la cooperación internacional continúa con acciones importantes en torno a la atención humanitaria y el desarrollo. Si bien hay reparos frente a estrategias como la "Hoja de Ruta<sup>51</sup>" de los PDET y Catatumbo Sostenible, estas priorizaciones pueden constituirse en una oportunidad para articular y movilizar agendas que atiendan la situación de seguridad en el corto plazo, y las apuestas de desarrollo en el mediano y

largo plazo. Sin embargo, esta oportunidad depende, en gran medida, de la apertura y sostenimiento de escenarios de diálogo, participación y articulación que involucren a la sociedad civil de manera activa. Estos escenarios tendrían que contemplar la incorporación efectiva del enfoque de género y el diseño de medidas afirmativas para proteger a las mujeres.

Aprendizajes y propuestas de procesos organizativos de base, así como nuevas agendas de movilización de las mujeres líderes: Juntas de acción comunal y organizaciones civiles regionales han jugado un papel activo en la visibilización de la situación de derechos humanos en la región, así como de propuestas para atender la situación humanitaria. La implementación del Acuerdo de Paz ha contado con el apoyo de diversos procesos de base y líderes sociales han acumulado distintas experiencias de resiliencia frente a situaciones humanitarias, inseguridad alimentaria y, recientemente, los efectos del covid-19. En este contexto, los liderazgos de mujeres están teniendo un protagonismo relevante a nivel comunitario que ha fortalecido el surgimiento de procesos locales. Los liderazgos de mujeres son un capital social de base para construir una agenda de equidad de género y paz en la región. El fortalecimiento y visibilidad de estos liderazgos resulta importante para la continuidad del proceso PDET y otras iniciativas institucionales.

<sup>51</sup> La hoja de ruta es una herramienta que permite ordenar la implementación en un horizonte de 15 años, teniendo como principal objetivo el cumplimiento de las más de 32.000 iniciativas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Agencia de Renovación del Territorio (ART). s.f. Hoja de Ruta PDET. Obtenido de: https://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/hoja-ruta-pdet/

· Los procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición aportan significativamente a la construcción de confianza y legitimidad con las mujeres en la región: La reparación de víctimas implica un desafío importante en el Catatumbo considerando la continuidad de afectaciones en la reconfiguración del conflicto armado. Para las mujeres líderes de la región, sus experiencias de resiliencia frente al conflicto han sido su mayor potencial; por eso, destacan que el reconocimiento de las afectaciones particulares que han tenido es central para construir colectivamente con actores institucionales. Los liderazgos de mujeres están jugando un papel activo en las mesas municipales de víctimas y otros escenarios. Fortalecer y visibilizar los procesos de reparación de víctimas, generar espacios de articulación e intercambio, y definir la ruta de participación de las mujeres en la implementación del punto 5 del Acuerdo (sobre las víctimas del conflicto52), al igual que la pedagogía, resulta un proceso significativo para generar confianza en la implementación del Acuerdo.

Esta es una discusión que sigue abierta y en la que es necesario incorporar diferentes actores territoriales en diálogos asertivos en torno a la equidad de género y la paz. La Incubadora ha buscado ser un espacio para sembrar diferentes semillas de diálogo e incidencia en torno a iniciativas y acciones locales lideradas por mujeres que, en articulación con actores estratégicos, permitan concretar acciones en estos territorios para hacer frente a profundas condiciones de fragilidad. Tras el trabajo de La Incubadora durante 2020, en 2021 la FIP y las organizaciones aliadas buscarán abrir espacios de diálogo e incidencia en torno a la reflexiones y preocupaciones planteadas, a través de mesas de trabajo, acciones territoriales, entre otras estrategias, que permitan sumar esfuerzos, potenciar capacidades y transformar territorios.

<sup>52</sup> En este punto se desarrollan los acuerdos centrales sobre: (1) Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; y (2) Compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos. Departamento Nacional de Planeación (DNP). 2018. Plan Marco de Implementación Consolidado. Obtenido de: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3932\_Anexo%20B\_Plan%20Marco%20de%20Implementaci%C3%B3n%20(PMI).pdf



# 4. Seis mensajes de La Incubadora sobre la construcción de paz y el rol de las mujeres en la transformación de la fragilidad territorial

# 01

Las organizaciones de mujeres han acumulado experiencias que pueden capitalizarse para la construcción de paz. En contextos de fragilidad, donde se combinan factores de riesgo como dinámicas ilegales, violencia, vulnerabilidades socioeconómicas, entre otras, hay también capacidades y expresiones de resiliencia, muchas de estas lideradas por mujeres, que ofrecen la posibilidad de mitigar y afrontar estos riesgos.

# 02.

Es prioritario realizar lecturas territoriales desde el enfoque de género sobre los desafíos de la implementación del Acuerdo de Paz para identificar acciones concretas que contribuyan a la equidad de género. El enfoque de género del Acuerdo de Paz se ha encontrado con diversos desafíos en su puesta en marcha. Se han sumado dinámicas locales como la migración, la reconfiguración del conflicto armado y vulnerabilidades estructurales que han profundizado brechas de género. Estas dinámicas varían según las regiones, lo que implica desafíos y apuestas diferenciales.

# 03.

Actualmente, en el Urabá preocupan las dinámicas de violencia sexual y la vinculación de jóvenes a redes de microtráfico. Así mismo, persisten brechas socioeconomicas y se percibe el modelo de desarrollo como centrado en lo económico y en menor medida en lo social. Para hacer frente a esto, existen experiencias y capacidades que pueden potenciarse en el corto y mediano plazo para impulsar la agenda de paz y equidad de género: escenarios de articulación multisectorial, iniciativas lideradas por organizaciones de mujeres a nivel veredal para el empoderamiento económico y estrategias comunitarias de prevención y atención de violencias (aplicativos móviles, "voz a voz", radios comunitarias, entre otros).

# 04.

En el Catatumbo, en el corto plazo, la protección de las mujeres frente a las dinámicas del conflicto armado y a las violencias de género es una de las principales prioridades debido al subregistro y al difícil acceso a justicia. Para hacer frente a esto, hay escenarios que pueden impulsarse para articular apuestas regionales en torno a la equidad de género y la paz: los liderazgos de mujeres, los cuales han fortalecido el surgimiento de procesos locales; las iniciativas de verdad, justicia y reparación (comunitarias e institucionales), que son un proceso significativo para generar confianza en la implementación del Acuerdo de Paz; e iniciativas como Catatumbo Sostenible que pueden incorporar de manera efectiva un enfoque de género que defina acciones y metas regionales para la protección de las mujeres y el impulso de la equidad de género.

# 05.

En estas regiones, hay desafíos que no solo conciernen a la implementación del Acuerdo de Paz, sino también a la creación y transformación de relaciones comunitarias para la generación de entornos equitativos y protectores. Avanzar en las medidas de género contempladas en el Acuerdo es prioritario, pero en paralelo debe trabajarse sobre dimensiones comunitarias que permitan que las medidas afirmativas dirigidas a las mujeres logren un impacto sostenible.

# 06

A nivel territorial, el Acuerdo de Paz ha traído logros aún no cuantificados o visibilizados para los liderazgos y procesos organizativos de mujeres. Tanto en Urabá como en Catatumbo, el Acuerdo permitió abrir agendas de trabajo para el desarrollo territorial, y el surgimiento de diversidad de liderazgos y espacios de interlocución con instituciones del Estado. Para las mujeres líderes en estas regiones, esta ha sido una oportunidad de formación de liderazgos y de formulación de agendas de trabajo en torno a la equidad.

FOTOGALERÍA DE LA INCUBADORA

05

# 5. Fotogalería de La Incubadora

La Incubadora inició en noviembre de 2019 como parte del proyecto "Alcanzar la Paz en medio de la fragilidad: ¿cómo interactúan la violencia, la seguridad y el desarrollo socioeconómico en Colombia?" implementado por la FIP y financiado por el IDRC de Canadá. El desarrollo de las actividades ha contado con el apoyo de la Asociación Mujeres del Plantón en el Urabá y la RedConcerto en el Catatumbo. En medio de la pandemia, La Incubadora ha realizado sus actividades virtualmente a través de video llamadas y grupos de WhatsApp. Este contexto ha traído diversos aprendizajes para las organizaciones territoriales y centros de investigación, con el desafío de preservar iniciativas de paz y trabajo colectivo. Así trabajamos durante 2020:





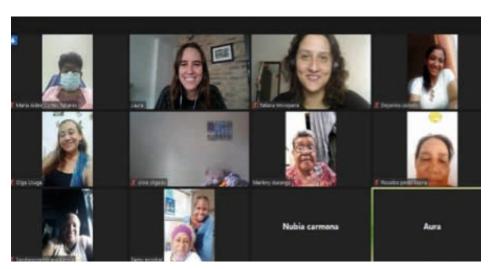


# Socialización y discusión de hallazgos con la Asociación Mujeres del Plantón y la RedConcerto. Septiembre de 2020





# **Jornada de cierre y balance de Diálogos Territoriales.** Noviembre 2020



# Intercambio de mensajes, Diálogos Territoriales de La Incubadora.

(WhatsApp. Octubre - noviembre 2020)

¡Buenos días estimadas! 😀 esperamos que se encuentren muy bien.

Hoy hablaremos sobre la resiliencia. Para esto, partiremos de las experiencias lideradas por mujeres en Colombia y en el extranjero que han sido referentes de organización, acción colectiva, diversidad de voces y trabajo conjunto.

Para esto, las invitamos a

- 2. Escuchar el audio sobre las Tejedoras de Mampuján 🚟.
- 3. Una vez hayas escuchado los audios, preséntate diciendo tu nombre, tu municipio y cuéntanos sobre algún momento en el que consideres que hayas superado alguna circunstancia traumática o dolorosa, aprendiendo de experiencias pasadas o siendo cooperativa, flexible, consistente, constante, precavida, recursiva, creativa, o inclusiva.

Te invitamos a compartir tu reflexión con el grupo, ya sea en un texto, audio o video, en lo posible antes de las 5:00 p.m. del día de hoy 💗 🜱

La diferencia los hombres y las mujeres genera la desigualdad en la guerra pero el logro de la paz. No garantiza mejores condiciones oara la mujer aunque termine el conflicto armado seguimos enfrentando discriminación violencia empobrecimiento falta de participación se nos cuentan los derechos maltrata sicológico falta de oportunidades por parte del Estado mucha violencia contra la mujer y los líderes no se les respeta la vida cada día son mas los líderes muertos en batallas tenemos por nuestras vidas.ya q tenemos un abandono total por parte de los entes correspondientes Q le recomendaría profundizar más el tema de la educación la cultura sano esparcimiento para aquellos niños q están ciendo reclutados por grupos al margen de la lev.

Recordando las píldoras del diálogo de paz.

El empoderamiento económico de las mujeres es clave en el proceso de participación, equidad y desarrollo económico de los territorios. Considero que uno de los factores que han promovido y potenciado la violencia basada en genero desde siempre ha sido la falta de autonomía económica de la mujer y lo cual la obliga a depender del hombre y a ser vista tradicionalmente como un ser servil inferior al hombre que es su proveedor y dueño porque desde este punto de vista es quien la sostiene, esto nos ha llevado históricamente y socialmente a continuar siendo un objeto y no un sujeto de derecho. Pero hoy por hoy nos hemos ido empoderando de nuestro papel en la vida y en la historia y podemos decir que estamos avanzando a pasos gigantes. Hoy gracias a aquellas que se han revelado contra la historia y la tradición tenemos otro papel y otra mirada de ser mujer, hoy podemos participar y decidir y uno de los puntos focales para poder dar otro importante paso es nuestro empoderamiento económico en todo sentido, no solo para mejorar nuestra calidad de vida sino también para hacer valer nuestros derechos. Muchas mujeres soportaron maltrato y opresión porque les daba temor dejar su hogar con la incertidumbre de no tener nada que ofrecer a sus hijos y verse desprotegida y a un hoy sigue sucediendo de muchas maneras esta situación pero seguiremos avanzando en la tarea y este espacio es una gran oportunidad para ello.

El estado deberá propiciar nos esas oportunidades que necesitamos y nosotras autogestionar ese empoderamiento y continuar con otras miradas nuestro proceso.

Gracias por este espacio 🏶 🏶 🍍

11:09 a.m.

buenas tardes mi nombre es bueno para darle pasó a mi respuesta temática de jóvenes actores claves yo invitaría al consejo noruego comisaría de familia bienestar familiar defensoría del pueblo salud pública por medio de talleres por canales de diálogo como las emisoras comunitarias aplicaríamos las píldoras del diálogo los hallazgos del problema en 6 meses se previene y se cambiará el pensamiento en un año ya se vería un cambio positivo sobre la situación que viven los jóvenes actualmente en 2 años ya sé replicaria la información y esos jóvenes replicarian la información y a veria menos riesgos y Abraham más oportunidades para que la juventud tenga una mejor calidad de vida y se evitaría los riesgos que corren ante la sociedad esa sería mi intervención pedirles disculpas porque en la mañana estaba de Jornada de aseo y en la tarde está cayendo una tormenta de agua y hasta ahorita me pude comunicar pedirles disculpas y que Dios los bendiga a todos muchísimas gracias atodos Dios los bendiga grandemente 🙏 🥮 😘



# Fundación Ideas para la Paz (FIP)

Calle 100 No. 8A – 37 Torre A. Of. 701. Bogotá Tel. (57-1) 218 3449 www.ideaspaz.org / e-mail: fip@ideaspaz.org